

## *Política, sociedad y cultura en América Latina*

Hoy por hoy, América Latina es una realidad compleja, por lo cual el examen global de sus tendencias socio-culturales —y de los dinamismos políticos y económicos que la sostienen— corre siempre el riesgo de la simplificación. De todos modos, aún a riesgo de simplificar, en la situación actual de América Latina hay al menos tres grandes ejes que marcan su realidad desde un punto de vista socio-cultural: (a) transición a la democracia-consolidación democrática; (b) expansión del mercado-urbanización del espacio físico; (c) cambios culturales caracterizados por la “urbanización” de los estilos de vida, la “privatización” de las prácticas sociales y el “estrechamiento” de la vida pública. Estos tres ejes ciertamente no agotan las tendencias socio-culturales de América Latina a finales del siglo XX, pero sí constituyen matrices explicativas de cuáles son los derroteros de la realidad latinoamericana en la actualidad.

Desde mediados de la década de 1960 hasta finales de la década de 1980, la mayor parte de los países suramericanos estuvieron dominados políticamente por los militares (lo que se ha dado en llamar Regímenes Burocrático Autoritarios)<sup>1</sup>. An-

tes de 1960, en casi todos ellos se habían impuesto regímenes políticos más o menos democráticos, es decir, regímenes políticos en los cuales mecanismos democráticos básicos, como las elecciones periódicas, los parlamentos, la libertad de expresión, la libertad de organización y movilización sociales habían echado raíces y gozaban de una cierta estabilidad. Estos regímenes políticos “preautoritarios” se inscribían en una matriz socio-política en la cual el Estado ocupaba un lugar fundamental como eje articulador de la política, la economía y la sociedad. “Esta matriz socio-política clásica, cuya vigencia con variantes diversas según países y momentos históricos se extiende en la mayor parte de este siglo hasta iniciar procesos de descomposición en las últimas décadas, estaba asociada en parte al modelo de ‘desarrollo hacia adentro’, por un lado, y a lo que se ha llamado el Estado de compromiso, por otro. Ella se basaba también en un consenso sobre el rol interventor del Estado no sólo en la economía, sino también en su papel de organizador social y político, lo que ha llevado a algunos a denominarla ‘matriz Estado céntrica’<sup>2</sup>.

1. Cfr. O'Donnel, G., *Modernización y autoritarismo*, Buenos Aires, 1972. Obviamente, los países centroamericanos han seguido en muchos aspectos un ritmo socio-cultural, político y económico distinto del seguido por el resto de países latinoamericanos. Así, en la región, la industrialización fue asumida en serio por los gobiernos hasta los años cincuenta y sesenta. Sin embargo, aunque con retrasos temporales inobjetables o con dinámicas específicas como la guerra civil salvadoreña o la revolución sandinista, Centroamérica ha seguido las grandes tendencias del desarrollo político, económico y social latinoamericano.
2. M.A. Garretón y M. Espinoza, *¿Reforma del Estado o cambio de matriz socio-política?*, Santiago de Chile, FLACSO, documento de trabajo-serie estudios sociales, No. 30, 1992, p. 9.

Cuando los militares llegan al poder, lo hacen con el propósito expreso de "salvar" a sus países de lo que figuras como Augusto Pinochet dieron en llamar el "cáncer comunista", que se había servido de las instituciones democráticas para socavar los cimientos del mundo libre. En la práctica, esa salvación se tradujo en una desarticulación violenta de los mecanismos democráticos vigentes, a los cuales los militares consideraron fomentadores de las iniciativas comunistas para tomarse el poder. En el marco de la embestida militar fueron cerrados los parlamentos; los medios de comunicación censurados; los dirigentes sindicales y políticos fueron encarcelados (y torturados) o asesinados; los partidos políticos fueron prohibidos.

La justificación inmediata de la irrupción violenta de los militares —y con ella del inicio de los regímenes políticos autoritarios— fue la de la crisis política que se desencadenó bajo los regímenes preautoritarios y que éstos no fueron capaces de contener. De este modo, como señala Garretón, "el elemento de crisis política deja en evidencia uno de los rasgos fundamentales de estos regímenes: son ellos de reacción, de contención, contrarrevolucionarios en algunos casos. Frente a la amenaza sobre el orden como fruto de la movilización popular acompañada de creciente radicalización ideológica, polarización y, en algunos casos, de crisis de funcionamiento de la sociedad, lo que se busca es poner orden, desmovilizar, 'normalizar', 'apaciguar'. Ello requiere la presencia del actor dotado de la fuerza y, para algunos, de la legitimidad: las F.F.A.A. Su intervención en un determinado sentido, y no en otro, debe... ser explicada en términos de la segunda dimensión a la que se asocian estos regímenes, la dimensión de 'proyecto'"<sup>3</sup>.

A principios de la década de 1980, los militares se muestran incapaces de seguir administrando políticamente a la sociedad. Aparece en el horizonte la posibilidad de que ellos cedan el poder a gobiernos civiles electos democráticamente. La década de los años ochenta se caracteriza en casi

todo el subcontinente por el traspaso del poder de manos militares a manos civiles y por el restablecimiento de los mecanismos democráticos desarticulados por los militares cuando llegaron al poder.

Este proceso es lo que se dio en llamar "transición a la democracia": salida de los militares del poder y reconstitución de las instituciones democráticas esenciales (sistemas electorales, partidos, medios de comunicación, sistemas de justicia) desarticulados por aquéllos. En otras palabras, transición democrática significó el reestablecimiento de los mecanismos institucionales y legales que hicieron factible la instauración de una democracia política, la cual debe estar fundada en un sistema de partidos, la competencia electoral y el respeto a la legalidad<sup>4</sup>. Durante la transición persisten "los rasgos y rezagos autoritarios después que formalmente ha concluido la vigencia de este régimen, por sobre las características de la construcción democrática. Esta presencia autoritaria mantendría pendiente la consumación de la transición así como la amenaza de la reversión autoritaria"<sup>5</sup>.

Visto retrospectivamente, el proceso de transición a la democracia se llevó adelante con relativo éxito en la mayor parte de países latinoamericanos durante toda la década de los años ochenta y los primeros años de la década de los años noventa. "Ello en el sentido que se habría dado lo fundamental del paso desde un régimen autoritario o militar a un régimen democrático expresado en la instalación de un núcleo básico de instituciones democráticas y de gobiernos también democráticamente elegidos"<sup>6</sup>. Pero, una vez superada la etapa de transición a la democracia, había que pasar a una segunda etapa: aquella en la cual las instituciones democráticas reestablecidas se mostraran capaces de funcionar no sólo mínimamente —eso fue lo propio de la transición—, sino en todo su potencial.

Esta nueva etapa del desarrollo político latinoamericano se ha dado en llamar la etapa de la consolidación democrática: las instituciones democrá-

3. M. A. Garretón, *En torno a la discusión de los nuevos regímenes autoritarios en América Latina*, Santiago de Chile, FLACSO, documento de trabajo, No. 98, 1980, p. 5.
4. Cfr. L. A. González, "Acercas de la transición a la democracia", *ECA* 573-574, julio-agosto, 1997, pp. 631-637.
5. B. M. Fernández, "Transición versus democratización: visiones alternativas sobre el cambio político". En D. Nohlen, B. M. Fernández (eds.), *El presidencialismo renovado. Instituciones y cambio político en América Latina*, Caracas, 1998, pp. 31-32.
6. M. A. Garretón, *La democracia entre dos épocas. América Latina 1990*, Santiago de Chile, FLACSO, documentos de trabajo-serie estudios políticos, No. 11, 1991, p. 5.

ticas no garantizan sólo los mínimos democráticos, sino los máximos que puedan dar. Por ejemplo, ya no basta con que no se asesine a los oponentes políticos —esto es lo mínimo—, sino que estos tengan todas las garantías y la posibilidad real de poder acceder a cargo de elección pública.

En otras palabras, en esta etapa “se acepta que el cambio de autoritarismo a democracia, en lo esencial, ha tenido lugar... [parte de] la constatación de que el cambio político se ha producido en los temas centrales del sistema político: legitimación democrática del poder, funcionamiento de las instituciones y del Estado de derecho, respeto de los derechos y de las libertades públicas e individuales, celebración de elecciones competitivas con participación de partidos legalmente investidos”<sup>7</sup>. Desde mediados de la década de 1990, la mayoría de países latinoamericanos han entrado en la etapa de consolidación democrática, aunque varios de ellos sin haber alcanzado plenamente la etapa de transición democrática. ¿Qué quiere decir esto?

Básicamente, que sin estar asegurados los mínimos democráticos —a ser alcanzados durante la transición— muchas sociedades están forzando a sus instituciones a que den mucho más de lo que efectivamente pueden dar en cuanto a erradicación de la exclusión social, participación, reconocimiento de estilos de vida diversos (homosexuales, lesbianas, maras, etc.) y cumplimiento de demandas de seguridad pública. Cuando esas exigencias no son cumplidas, la frustración social hace su aparición, dando lugar a amenazas de inestabilidad y desorden. Así, la tensión transición democrática-consolidación de la democracia es una tensión que marca a casi todas las sociedades latinoamericanas en la actualidad. Sin entender esa tensión, es difícil hacerse una idea de los desafíos políticos más urgentes que ellas tienen que sortear para evitar el descalabro socio-político y garantizar una mínima estabilidad social.

Pero bajo esa tensión subyacen dos aspectos más que no conviene dejar de lado: el primero es el renacimiento-recomposición de la sociedad civil latinoamericana. Renacimiento porque los militares impidieron que la sociedad civil pudiera expresarse, y es hasta que la etapa de las transiciones que ella resurge, ocupando el espacio que le co-

rresponde en la dinámica social. **Recomposición** porque la sociedad civil que resurge no es la misma que la que fue sofocada por los militares, sino una sociedad temerosa y a la vez ansiosa de participar en la vida pública. Es una sociedad civil, además, con nuevas demandas —que no pasan necesariamente por la política— y con nuevos grupos emergentes: jóvenes, mujeres, ecologistas, organismos no gubernamentales, homosexuales, lesbianas, etc., cuya dispersión y atomización les restan fuerza a la hora de hacer sentir sus demandas. La transición democrática exige de la presencia de una sociedad civil fuerte, organizada y participativa; “ello obliga a reconocer institucionalmente que existe una diversidad de intereses y aspiraciones sociales, que no son reductibles ni siquiera a grandes conglomerados de clase o de representación política partidaria. La fortaleza de la sociedad civil tiene que ver con la existencia de espacios viables y diversificados de acción individual, social y política”<sup>8</sup>.

El segundo aspecto es la tensión cultura política autoritaria-cultura política democrática. Para entender esa tensión hay que caer en la cuenta de que los militares no sólo dominaron políticamente a la sociedad, sino también que difundieron una serie de valores políticos en los cuales la autoridad y la fuerza ocupaban un lugar de primera importancia. Sociedades que vivieron veinte años o más bajo el control militar no podían dejar de verse influenciadas por esos valores. La transición-consolidación democrática promueve y exige valores como la tolerancia, el respeto a lo distinto y el diálogo permanente. Estos valores propios de una cultura política democrática entran en choque con los valores generados por el autoritarismo, que persisten por sobre las características de la construcción democrática.

En el momento actual, la pervivencia de valores autoritarios socava fuertemente el rumbo democrático de las sociedades latinoamericanas. Además de ello, las transiciones han tenido que cargar con prácticas y esquemas institucionales heredados por los regímenes militares y que, durante las transiciones, se convierten en lo que Manuel Antonio Garretón llama “enclaves autoritarios”. De aquí que las transiciones a la democracia “tenden a ser incompletas, es decir, a dejar herencias del régimen anterior en la forma de enclaves o resi-

7. *Ibid.*, p. 32.

8. M. A. Garretón, *Hacia una nueva era política. Estudio sobre democratizaciones*, México, 1995, p. 221.

Cuando los militares llegan al poder, lo hacen con el propósito expreso de "salvar" a sus países de lo que figuras como Augusto Pinochet dieron en llamar el "cáncer comunista", que se había servido de las instituciones democráticas para socavar los cimientos del mundo libre. En la práctica, esa salvación se tradujo en una desarticulación violenta de los mecanismos democráticos vigentes, a los cuales los militares consideraron fomentadores de las iniciativas comunistas para tomarse el poder. En el marco de la embestida militar fueron cerrados los parlamentos; los medios de comunicación censurados; los dirigentes sindicales y políticos fueron encarcelados (y torturados) o asesinados; los partidos políticos fueron prohibidos.

La justificación inmediata de la irrupción violenta de los militares —y con ella del inicio de los regímenes políticos autoritarios— fue la de la crisis política que se desencadenó bajo los regímenes preautoritarios y que éstos no fueron capaces de contener. De este modo, como señala Garretón, "el elemento de crisis política deja en evidencia uno de los rasgos fundamentales de estos regímenes: son ellos de reacción, de contención, contrarrevolucionarios en algunos casos. Frente a la amenaza sobre el orden como fruto de la movilización popular acompañada de creciente radicalización ideológica, polarización y, en algunos casos, de crisis de funcionamiento de la sociedad, lo que se busca es poner orden, desmovilizar, 'normalizar', 'apaciguar'. Ello requiere la presencia del actor dotado de la fuerza y, para algunos, de la legitimidad: las F.F.A.A. Su intervención en un determinado sentido, y no en otro, debe... ser explicada en términos de la segunda dimensión a la que se asocian estos regímenes, la dimensión de 'proyecto'"<sup>3</sup>.

A principios de la década de 1980, los militares se muestran incapaces de seguir administrando políticamente a la sociedad. Aparece en el horizonte la posibilidad de que ellos cedan el poder a gobiernos civiles electos democráticamente. La década de los años ochenta se caracteriza en casi

todo el subcontinente por el traspaso del poder de manos militares a manos civiles y por el restablecimiento de los mecanismos democráticos desarticulados por los militares cuando llegaron al poder.

Este proceso es lo que se dio en llamar "transición a la democracia": salida de los militares del poder y reconstitución de las instituciones democráticas esenciales (sistemas electorales, partidos, medios de comunicación, sistemas de justicia) desarticulados por aquéllos. En otras palabras, transición democrática significó el reestablecimiento de los mecanismos institucionales y legales que hicieron factible la instauración de una democracia política, la cual debe estar fundada en un sistema de partidos, la competencia electoral y el respeto a la legalidad<sup>4</sup>. Durante la transición persisten "los rasgos y rezagos autoritarios después que formalmente ha concluido la vigencia de este régimen, por sobre las características de la construcción democrática. Esta presencia autoritaria mantendría pendiente la consumación de la transición así como la amenaza de la reversión autoritaria"<sup>5</sup>.

Visto retrospectivamente, el proceso de transición a la democracia se llevó adelante con relativo éxito en la mayor parte de países latinoamericanos durante toda la década de los años ochenta y los primeros años de la década de los años noventa. "Ello en el sentido que se habría dado lo fundamental del paso desde un régimen autoritario o militar a un régimen democrático expresado en la instalación de un núcleo básico de instituciones democráticas y de gobiernos también democráticamente elegidos"<sup>6</sup>. Pero, una vez superada la etapa de transición a la democracia, había que pasar a una segunda etapa: aquella en la cual las instituciones democráticas reestablecidas se mostraran capaces de funcionar no sólo mínimamente —eso fue lo propio de la transición—, sino en todo su potencial.

Esta nueva etapa del desarrollo político latinoamericano se ha dado en llamar la etapa de la consolidación democrática: las instituciones democráticas

3. M. A. Garretón, *En torno a la discusión de los nuevos regímenes autoritarios en América Latina*, Santiago de Chile, FLACSO, documento de trabajo, No. 98, 1980, p. 5.
4. Cfr. L. A. González, "Acerca de la transición a la democracia", *ECA* 573-574, julio-agosto, 1997, pp. 631-637.
5. B. M. Fernández, "Transición versus democratización: visiones alternativas sobre el cambio político". En D. Nohlen, B. M. Fernández (eds.), *El presidencialismo renovado. Instituciones y cambio político en América Latina*, Caracas, 1998, pp. 31-32.
6. M. A. Garretón, *La democracia entre dos épocas. América Latina 1990*, Santiago de Chile, FLACSO, documentos de trabajo-serie estudios políticos, No. 11, 1991, p. 5.

ticas no garantizan sólo los mínimos democráticos, sino los máximos que puedan dar. Por ejemplo, ya no basta con que no se asesine a los oponentes políticos —esto es lo mínimo—, sino que estos tengan todas las garantías y la posibilidad real de poder acceder a cargo de elección pública.

En otras palabras, en esta etapa “se acepta que el cambio de autoritarismo a democracia, en lo esencial, ha tenido lugar... [parte de] la constatación de que el cambio político se ha producido en los temas centrales del sistema político: legitimación democrática del poder, funcionamiento de las instituciones y del Estado de derecho, respeto de los derechos y de las libertades públicas e individuales, celebración de elecciones competitivas con participación de partidos legalmente investidos”<sup>7</sup>. Desde mediados de la década de 1990, la mayoría de países latinoamericanos han entrado en la etapa de consolidación democrática, aunque varios de ellos sin haber alcanzado plenamente la etapa de transición democrática. ¿Qué quiere decir esto?

Básicamente, que sin estar asegurados los mínimos democráticos —a ser alcanzados durante la transición— muchas sociedades están forzando a sus instituciones a que den mucho más de lo que efectivamente pueden dar en cuanto a erradicación de la exclusión social, participación, reconocimiento de estilos de vida diversos (homosexuales, lesbianas, maras, etc.) y cumplimiento de demandas de seguridad pública. Cuando esas exigencias no son cumplidas, la frustración social hace su aparición, dando lugar a amenazas de inestabilidad y desorden. Así, la tensión transición democrática-consolidación de la democracia es una tensión que marca a casi todas las sociedades latinoamericanas en la actualidad. Sin entender esa tensión, es difícil hacerse una idea de los desafíos políticos más urgentes que ellas tienen que sortear para evitar el descalabro socio-político y garantizar una mínima estabilidad social.

Pero bajo esa tensión subyacen dos aspectos más que no conviene dejar de lado: el primero es el renacimiento-recomposición de la sociedad civil latinoamericana. Renacimiento porque los militares impidieron que la sociedad civil pudiera expresarse, y es hasta que la etapa de las transiciones que ella resurge, ocupando el espacio que le co-

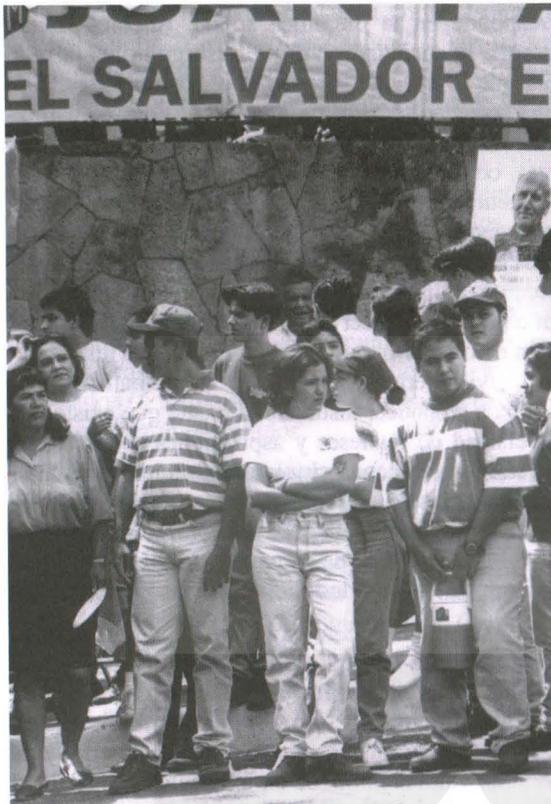
responde en la dinámica social. Recomposición porque la sociedad civil que resurge no es la misma que la que fue sofocada por los militares, sino una sociedad temerosa y a la vez ansiosa de participar en la vida pública. Es una sociedad civil, además, con nuevas demandas —que no pasan necesariamente por la política— y con nuevos grupos emergentes: jóvenes, mujeres, ecologistas, organismos no gubernamentales, homosexuales, lesbianas, etc., cuya dispersión y atomización les restan fuerza a la hora de hacer sentir sus demandas. La transición democrática exige de la presencia de una sociedad civil fuerte, organizada y participativa; “ello obliga a reconocer institucionalmente que existe una diversidad de intereses y aspiraciones sociales, que no son reductibles ni siquiera a grandes conglomerados de clase o de representación política partidaria. La fortaleza de la sociedad civil tiene que ver con la existencia de espacios viables y diversificados de acción individual, social y política”<sup>8</sup>.

El segundo aspecto es la tensión cultura política autoritaria-cultura política democrática. Para entender esa tensión hay que caer en la cuenta de que los militares no sólo dominaron políticamente a la sociedad, sino también que difundieron una serie de valores políticos en los cuales la autoridad y la fuerza ocupaban un lugar de primera importancia. Sociedades que vivieron veinte años o más bajo el control militar no podían dejar de verse influenciadas por esos valores. La transición-consolidación democrática promueve y exige valores como la tolerancia, el respeto a lo distinto y el diálogo permanente. Estos valores propios de una cultura política democrática entran en choque con los valores generados por el autoritarismo, que persisten por sobre las características de la construcción democrática.

En el momento actual, la pervivencia de valores autoritarios socava fuertemente el rumbo democrático de las sociedades latinoamericanas. Además de ello, las transiciones han tenido que cargar con prácticas y esquemas institucionales heredados por los regímenes militares y que, durante las transiciones, se convierten en lo que Manuel Antonio Garretón llama “enclaves autoritarios”. De aquí que las transiciones a la democracia “tenden a ser incompletas, es decir, a dejar herencias del régimen anterior en la forma de enclaves o resi-

7. *Ibíd.*, p. 32.

8. M. A. Garretón, *Hacia una nueva era política. Estudio sobre democratizaciones*, México, 1995, p. 221.



duos autoritarios. Con ello no nos referimos a problemáticas históricas no resueltas por estas sociedades ni por los gobiernos militares como la ausencia de un modelo de desarrollo adecuado, la pobreza, la dependencia, la desorganización social. Aludimos, en cambio, a cuestiones estrictamente atinentes al régimen político que las transiciones no resolvieron y que dejan pendientes para su resolución por parte de los primeros gobiernos democráticos<sup>9</sup>.

En resumen, aunque la transición a la democracia es distinta de la consolidación de la democracia, la segunda requiere del desarrollo óptimo que la primera para lograr sus metas fundamentales. Sólo unos pocos países latinoamericanos han logrado un ensamble bastante exitoso entre ambas. En segundo lugar, la transición-consolidación democráticas han permitido el renacimiento de la sociedad civil, pero ese renacimiento plantea problemas inéditos a los gobiernos, pues sus deman-

das suelen exceder la capacidad de las instituciones para darles respuesta. Finalmente, pese a la transición-consolidación democráticas, perviven en las sociedades latinoamericanas valores políticos contrarios a la democracia, es decir, valores autoritarios, herencia de los regímenes militares que tiene que ser suplantada por unos valores democráticos apenas incipientes en la conciencia colectiva.

Al menos desde 1930, en América Latina la producción industrial —mecanización de los procesos productivos, mano de obra asalariada, criterios de oferta y demanda— se convirtió en un eje importante de la actividad económica<sup>10</sup>. Aunque más acentuada en unos países que en otros, el fomento de la actividad industrial apareció como la palanca para lograr un desarrollo económico que trajera riqueza y bienestar a los países. El desafío era producir aquellos bienes industriales que se importaban, pues la necesidad de importación de esos bienes obligaban a las economías latinoamericanas a depender de la producción de bienes agrícolas para la exportación.

Varios gobiernos latinoamericanos decidieron que era tarea de los aparatos estatales asumir como función exclusiva la industrialización de las economías. Otros gobiernos asumieron con menos intensidad el desafío o no pudieron impulsarlo a fondo —por la fuerza de los grupos oligárquicos—, pero su ideal era avanzar hacia el desarrollo por la vía del fomento industrial. Al calor de estas ideas, los estados latinoamericanos se involucraron en la actividad económica como agentes centrales. Gracias a la intervención estatal, una clase empresarial capitalista comenzó a echar raíces; las inversiones industriales promovidas por el Estado se expandieron; la infraestructura (carreteras, puertos, alcantarillado, alumbrado público) se amplió en los centros urbanos; emergió una mano de obra industrial muchas veces sindicalizada; y el comercio y la actividad bancaria comenzó a girar en torno a las necesidades del emergente sector industrial.

Como dice Marcelo Cavarozzi, desde 1930 hasta fines de la década de los años setenta, se estableció un equilibrio “entre la economía de mercado, por un lado, y Estado (definido como mecanismo de regulación política de la economía), por otro. A pe-

9. Cfr. Nota 6, p. 7.

10. Cfr. L. A. González, “Estado, mercado y sociedad civil en América Latina”, *ECA* 552, octubre, 1994, pp. 1045-1056.

sar de que las empresas capitalistas privadas continuaron operando durante las cinco décadas posteriores a la Gran Depresión, ellas estuvieron sujetas a incentivos y limitaciones diseñados y controlados por el Estado. De hecho, la diferenciación interna y complejidad de las economías latinoamericanas aumentaron durante este período, la producción para el mercado interno se transformó en el núcleo dinámico de las economías nacionales, y varios países alcanzaron niveles elevados de crecimiento económico<sup>11</sup>. En otras palabras, desde los años treinta, la economía de mercado comenzó su despegue en América Latina. Pero lo hizo al amparo de la intervención del Estado y sin llegar a convertirse en el eje fundamental del sistema económico. Ese eje fue la producción agrícola hasta la década de los años setenta. En la década de los años sesenta, la presencia del Estado en la economía pone de manifiesto una serie de efectos contrarios al crecimiento económico y a la prosperidad empresarial.

El primer efecto es la inflación, debido a políticas monetarias que apuestan por la emisión permanente de moneda (por los Bancos Centrales) para responder a las demandas salariales de los trabajadores, para cubrir los costos de las inversiones públicas (muchas de ellas improductivas) y para mantener las políticas de subsidios (transporte, alimentación, educación) que los gobiernos implementaban para garantizar el apoyo político de grupos sociales significativos.

En segundo lugar, los sistemas impositivos se cargan progresivamente sobre la riqueza de los empresarios, quienes se sienten expoliados por una política estatal que busca llevar riqueza de los sectores productivos a los sectores no productivos. Progresivamente, los grupos empresariales se van mostrando más inconformes con la política distributiva del Estado que afecta directamente sus posibilidades de capitalizar sus ganancias y expandir sus industrias. En tercer lugar, las empresas nacidas al amparo de la protección estatal no tienen mayores incentivos para el mejoramiento de los procesos productivos; es decir, se cae en un estancamiento in-

dustrial que hace de las economías latinoamericanas poco competitivas en el plano internacional.

Los militares, al arribar al poder a mediados de los años sesenta, no sólo lo hacen para contener las movilizaciones sociales (el "cáncer comunista"), sino para tratar de recomponer las economías nacionales. Una de sus metas es precisamente liberar a las fuerzas del mercado de la tutela estatal. Sin embargo, lo hacen sólo parcialmente, pues la presencia estatal se ve fortalecida en enclaves económicos estratégicos como la energía y las comunicaciones. Las reformas emprendidas por los militares se muestran insuficientes para hacer frente al impacto de la crisis del petróleo (1973) que hace tambalear a la economía mundial y pone en severos aprietos a las industrias que recién se están "liberando". En efecto, después de la primer alza de los precios del petróleo, y especialmente desde fines de aquella década, la economía mundial experimentó una doble transformación, que no dejó de ser contradictoria.

Por una parte, el proceso de globalización de la producción y de las tecnologías, especialmente del sector manufacturero, generó un fenómeno de integración de las industrias y los servicios que no respetó las fronteras nacionales. Aquellas firmas que no están integradas a las nuevas cadenas corren el riesgo creciente de quedar desvinculadas de las redes de intercambio internacional. Por otra parte, la contracción del crédito internacional y mayor selectividad de los inversores de capital... llevaron a poner un premio especial a la estabilidad monetaria y al equilibrio financiero. Esto ocurrió precisamente en la coyuntura en la que, con la excepción de Colombia y Chile a partir de 1975, las economías latinoamericanas estaban sufriendo el colapso irreversible de los equilibrios precarios que habían sostenido a la matriz Estado céntrica<sup>12</sup>.

Diez años después, la crisis de la deuda (1982-83) agudiza la situación económica de los países de la región que se ven sometidos a fuertes presiones de la banca internacional para cancelar los préstamos obtenidos quince o veinte años antes.

11. M. Cavarozzi, "Más allá de las transiciones. Reflexiones sobre el largo plazo en la política latinoamericana". En C. Barba Solano, J. L. Barros Horcasitas, J. Hurtado (comps.), *Transiciones a la democracia en Europa y América Latina*, México, FLACSO-Porrúa-Universidad de Guadalajara, 1991, pp. 394-395.
12. Cfr. M. Cavarozzi, "Beyond Transitions to Democracy in Latin America" (mimeo, 1991); W. C. Smith; C. H. Acuña y A. E. Gamarra (eds.), *Latin America Political Economy in the Age of Neoliberal Reform*, Miami, 1994; F. Calderon y M. Dos Santos, *Hacia un nuevo modelo estatal en América Latina*, Santiago de Chile, 1991.

Ambas crisis se producen en un entorno mundial en el cual los estados de bienestar europeos están sometidos a fuertes cuestionamientos. Asimismo, se trata de un entorno mundial en el cual las materias primas están siendo reemplazadas por materiales sintéticos que hacen que las exportaciones tradicionales latinoamericanas vayan perdiendo importancia en el mercado mundial.

Así, "la crisis de la deuda que irrumpió en el continente en agosto de 1982 dejó tras de sí un período de recesión y penuria para millones de latinoamericanos. Esta crisis obligó a América Latina a entrar en un carrusel infinito de negociaciones de su deuda, y brindó al gobierno de Reagan, junto con el FMI y otras instituciones financieras internacionales, la oportunidad de obtener toda la ventaja que necesitaban para replantear la economía de la región, en alianza con los bancos comerciales acreedores del Norte y los apologistas autóctonos de la teoría del libre mercado. América Latina estaba lista para una revolución del libre mercado"<sup>13</sup>.

Los militares, en consecuencia, ven socavada su autoridad ante grupos empresariales que conciben su presencia como un obstáculo para la expansión plena de las fuerzas del mercado. Estos grupos empresariales abanderan planteamientos neoliberales radicales, es decir, planteamientos a favor de un Estado mínimo, limitado a las tareas básicas, tales como la defensa de la soberanía nacional y la seguridad pública. La salida de los militares del poder y el arribo de regímenes políticos democráticos viene acompañado de cambios económicos que están modificando el perfil socio-económico de América Latina:

(a) Pérdida de protagonismo del sector agrícola como eje fundamental de la actividad económica nacional; (b) despoblación creciente de las zonas rurales y crecimiento y multiplicación de los centros urbanos, con el subsiguiente aumento de las demandas asociadas a la vida urbana: agua potable, recolección de basura, escuelas, centros de recreación, transporte, etc.; (c) relativo estancamiento de la actividad industrial, que no se ha logrado superar el retraso tecnológico al que lo llevó el proteccio-

nismo estatal de las décadas precedentes; (d) auge del sector servicios (sistema financiero; complejos comerciales) como unos de los ejes principales de la actividad económica; (e) expansión de una infraestructura asociada y en función del desarrollo del sector terciario (autopistas, edificios, redes de comunicación); (f) predominio creciente de mecanismos de mercado para regular las actividades económicas, esta vez con una presencia mínima del Estado y, además, con una tendencia a reducir su participación allí donde aun es decisiva. En un contexto de reestructuración económica mundial y de ajuste de las economías periféricas, "se transfiere a las fuerzas del mercado un papel protagónico en la organización de las relaciones sociales, en desmedro del Estado y de los regímenes políticos... En la medida que el Estado se subordine a la dinámica de un mercado excluyente, perderá capacidad de regulación social y específicamente no cumplirá nuevas funciones imprescindibles para una reconversión exitosa"<sup>14</sup>.

En resumen, las últimas tres décadas del siglo XX dejaron cambios espectaculares en América Latina. La lógica del mercado se expandió en las diversas actividades económicas, mientras que el Estado cedió terreno a los empresarios, y los rubros tradicionales de producción (industria y agricultura) fueron desplazados por las actividades financieras vinculadas más a los ritmos de los mercados financieros mundiales que a los intereses particulares de los países. Los países se han urbanizado físicamente y las áreas rurales despobladas y abandonadas financieramente se deterioran cada vez más. Duncan Green denomina este proceso como una "revolución silenciosa", la cual se sostiene en la fórmula liberal según la cual es necesario "reestructurar la economía para reducir el protagonismo del Estado y dar rienda suelta al sector privado. El corolario es la privatización de las empresas estatales y la supresión de las normas que regulan el comercio y la inversión"<sup>15</sup>.

Los procesos políticos y los procesos económicos reseñados en los apartados anteriores se han visto acompañados de cambios culturales de gran envergadura. La urbanización no sólo tiene una dimensión física, sino una dimensión cultural, en el

13. D. Green, *La revolución silenciosa. El auge de la economía de mercado en América Latina*, Santafé de Bogotá, 1995, pp. 15-16.

14. F. Calderón y M. Dos Santos, *Hacia un nuevo ...*, p. 32 y ss.

15. D. Green, *La revolución silenciosa...*, p. XVII.

sentido que también afecta y moldea los “estilos de vida” de los habitantes latinoamericanos. Como hacen notar Fernando Calderón y Mario Dos Santos, “existe en las sociedades de la región una fuerte movilización socio-cultural y de identidades culturales, pero a través de movimientos sociales de orientación simbólica que no alcanzan una intercomunicación y globalización. Por lo tanto, en general no logran participar en las transformaciones culturales predominantes ni modificar sus orientaciones”<sup>16</sup>.

Se urbanizan las aspiraciones profesionales (no se quiere vivir o trabajar en el campo); se urbanizan los gustos y las modas; y se urbaniza el consumo, el cual apunta cada vez más a la adquisición de tecnologías electrónicas (VHS-TV-Radio, celulares, cable, computadores). Dos actores son determinantes en este proceso de urbanización de los estilos de vida: (a) las migraciones y (b) las comunicaciones. Una segunda tendencia socio-cultural es la que apunta a la “privatización” de las prácticas sociales: la expansión urbana no sólo aumenta el número de personas que habitan una zona, sino que, amén de los peligros asociados a los nuevos habitantes (criminales, fisgones), hace más difícil el trato personal con cada uno de ellos. La privatización, pues, no sólo tiene que ver con la transferencia de recursos estatales a manos privadas, sino también con una transformación en las prácticas sociales, las cuales se adscriben cada vez más al ámbito del propio grupo familiar.

Además, los ritmos de trabajo asociados al éxito profesional (o al pago de las deudas) hace del hogar un nicho no sólo en el cual transita para la nueva jornada, sino el espacio que permite materializar, en la fachada y en los autos, las conquistas económicas obtenidas que hacen a quien las obtiene distinto y “mejor” que sus vecinos. Esto hace del hogar un espacio privado, que de puertas adentro es exclusivo de la familia nuclear, pues no hay tiempo para atender a otros parientes o, mucho menos, a amigos o vecinos. La contrapartida de ello es el agotamiento de la vida pública: el tiempo se convierte, más que en bien preciado en aquello que marca el ritmo de las actividades cotidianas. La intensificación de los logros asociados a un es-

tilo de vida urbanizado no dejan tiempo para actividades no conducentes (o sólo indirectamente) a un logro privado, como lo son las actividades comunitarias. Es decir, América Latina se estaría inclinando, en la historia de los ciclos privado-público —que según Albert O. Hirschman caracteriza a las sociedades modernas— hacia el primero de los polos: una “casi concentración en las metas de mejoramiento individual y el bienestar privado”<sup>17</sup>.

La vida del trabajo y las estadías fugaces en el hogar no dejan tiempo para otras cosas; en consecuencia, los vínculos comunitarios decaen, al igual que decae el compromiso público. Se opera una “individualización” de las prácticas sociales. Como señalan Thomas Manz y Moira Zuazo: “un elemento característico para las actuales transformaciones sociales y culturales es la ‘individualización’ que parece ser un proceso acompañado por una cierta ‘deserción civil’, es decir por la pérdida de interés por lo público. Y en la medida en que se reduce el interés por lo público, la individualización socava el animus societatis de la democracia”<sup>18</sup>.

Así pues, a nivel socio-cultural en la América Latina actual se están sucediendo cambios importantes. Los estilos de vida se urbanizan, con lo cual nuevas aspiraciones, gustos y demandas hacen su aparición. Prácticas comunitarias, asociadas más a estilos de vida rurales, están siendo reemplazadas por prácticas privatizadas, asociadas a la competencia y el éxito económico. Como resultado de ello, se “disgregan” las culturas tradicionales y crecen las “instalaciones necesarias para la circulación acelerada de personas y bienes”<sup>19</sup>.

A continuación, siguiendo a Nestor García Canclini, presentamos los elementos que caracterizan la nueva escena socio-cultural en América Latina:

“(a) Un redimensionamiento de las instituciones y los circuitos de ejercicio de lo público: pérdida de peso de los organismos locales y nacionales en beneficio de los conglomerados empresariales de alcance transnacional.

(b) La reformulación de los patrones de asentamiento y convivencia urbanos: del barrio a los

16. Nota 15, pp. 40-41.

17. A. O. Hirschman, *Interés privado y acción pública*, México, 1986, p. 11.

18. Th. Manz y M. Zuazo (coordinadores), *Partidos políticos y representación en América Latina*, Caracas, 1998, p. 8.

19. N. García Canclini, *Consumidores y ciudadanos. Conflictos culturales de la globalización*, México, 1995, p. 87.

condominios, de las interacciones próximas a la diseminación policéntrica de la mancha urbana, sobre todo de las grandes ciudades, donde las actividades básicas (trabajar, estudiar, consumir) se realizan a menudo lejos del lugar de residencia y donde el tiempo empleado para desplazarse por lugares desconocidos de la ciudad reduce el disponible para habitar el propio.

(c) La reelaboración de 'lo propio', debido al predominio de los bienes y mensajes procedentes de una economía y una cultura globalizadas sobre los generados en la ciudad y la nación a las cuales se pertenece.

(d) La consiguiente redefinición del sentido de pertenencia a identidad, organizado cada vez menos por lealtades locales o nacionales y más por la participación en comunidades transnacionales o desterritorializadas de consumidores (los jóvenes en torno al rock, las televidentes que siguen los

programas de CNN, MTV y otras cadenas transmitidas por satélites).

(e) El pasaje del ciudadano como representante de una opinión pública al ciudadano como consumidor interesado en disfrutar de una cierta calidad de vida. Una de las manifestaciones de este cambio es que las formas argumentativas y críticas de participación ceden su lugar al goce de espectáculos en los medios electrónicos, en los cuales la narración o simple acumulación de anécdotas prevalece sobre el razonamiento de los problemas, y la exhibición fugaz de los acontecimientos sobre su tratamiento estructural y prolongado<sup>20</sup>.

San Salvador, 20 de diciembre de 2001.

**Luis Armando González**  
**Director del Centro de Información,**  
**Documentación**  
**y Apoyo a la Investigación**



20. N. García Canclini, *ibid.*, pp. 24-25.